

## **NO TOMÉIS LOS DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES EN VANO**

**Eusebio Fernández**

*Universidad Carlos III de Madrid*



**E** S difícil no estar de acuerdo en general, por su contenido y metodología, con la ponencia del profesor Gregorio Peces-Barba «Los derechos económicos, sociales y culturales: su génesis y su concepto». Solamente los que se sitúen en los planteamientos neoliberales de un simplificado y bastante abstracto liberalismo economicista o los que consideren que las funciones del Estado deben limitarse exclusivamente a garantizar la vida, la seguridad y las libertades de los propietarios (como una especie de consejo de administración de los intereses de la burguesía fue visto y rechazado el Estado liberal por parte de los primeros teóricos marxistas y socialistas), solamente para los fanáticos de la libertad de mercado sin fronteras y de la supervivencia de los más aptos, solamente para los que se muevan dentro de esas coordenadas ideológicas, el rechazo de lo que en esta ponencia se dice será la respuesta más coherente.

Sin embargo, he deseado titular mi comunicación «No toméis los derechos económicos, sociales y culturales en vano» como una manera de alertar sobre una actitud bastante cínica en relación con esos derechos y que conside-

ro está muy extendida entre los legisladores, los políticos, los jueces y los profesores de aquellas disciplinas teóricas que han de tratar sobre estos asuntos. Me refiero al evidente contraste que existe, y no es un problema que atañe solamente a nuestro país ya que es mucho más general e indicativo de las opiniones de una determinada cultura política y jurídica: la liberal-democrática, entre los derechos proclamados en la Constitución (nunca se sabrá si con auténtica voluntad política, por razones legítimas de consenso constitucional o por interesadas razones electoralistas), unas garantías jurídicas diferentes según el carácter de los derechos (pero hasta los que cuentan con menores garantías en nuestra Constitución, art. 53, gozan de un mínimo reconocimiento) por un lado, y por otro lado una realidad que asfixiada por la tozudez (también por la manipulación) de los hechos de la evolución de la economía de mercado no está dispuesta a sentirse atrapada por lo que considera vanas promesas políticas. En resumen, resulta muy sorprendente que las mismas personas que no se plantean críticamente el porqué de la inclusión de los derechos económicos, sociales y culturales y dan por supuesto un consenso reflejado en textos internacionales y de Derecho interno hayan llegado a contemporizar y a compartir una actitud práctica similar a la de los que piensan que este tipo de derechos no son los auténticos derechos.

Se me responderá, y no con falta de razones, que esta actitud esquizofrénica es inevitable si deseamos tomarnos en serio los derechos humanos. Que mientras los negadores de los derechos económicos, sociales y culturales lo hacen a partir de una determinada opción ideológica que rechaza el intervencionismo del Estado social y democrático de Derecho, viendo con verdadera alarma cualquier planificación que menoscabe las libertades individuales, ellos aspiran a la instauración de este tipo de Estado que, por el momento, debe esperar tiempos mejores. Además, podrán añadir, muy convicentemente, que el Estado de Derecho es sumamente cuidadoso en la protección de los derechos personales, cívicos y políticos, puesto que una coherente y suficiente vigencia de éste cuenta con los medios necesarios para su garantía efectiva. Sin embargo, seguirán indicando, la Constitución es incapaz de crear ese marco de recursos sociales y económicos preciso para que todos tengan derecho a la educación, al desarrollo cultural, a oportunidades sociales y económicas similares, a la protección de la salud o a pensiones suficientes. En definitiva, la Constitución ha hecho un enorme esfuerzo de reconocimiento de los derechos que contienen las necesidades básicas conformes a un «orden económico y social justo», a una «sociedad democrática avanzada» (como reza en su preámbulo) y a la configuración de un Estado social y democrático de Dere-

cho» (art. 1), pero un imperativo nacido del sentido común y de la prudencia le ha llevado a dejar claro el contenido, alcance y límites, del artículo 53. El día que contemos con suficientes recursos el sabio legislador irá más allá en el intento de contentar a los hoy desilusionados. Todo este discurso es muy plausible y aquí acabaría la historia, la historia que solemos repetir en clase año tras año, si no fuera porque junto al alumno que pragmáticamente y de forma realista se alinea con nuestro sentido común y prudencia, las de la Constitución ni más ni menos, también aparece, de vez en cuando, otro tipo de alumno mezcla de ingenuidad y quizá de sentimiento utópico, también escéptico y en todo caso despabilado y crítico que nos recuerda que la realidad social no sólo la construyen los medios culturales, sociales y económicos sino también nuestra voluntad y que dado que los recursos son y van a ser limitados ¿por qué —se pregunta— no vamos pensando en una más justa, en el sentido de igualitaria, distribución de ellos? Y aquí, en el intento ya de responder a este alumno, comenzamos a escribir un capítulo nuevo de la historia u otra historia diferente, en todo caso nos habríamos salido del contexto de una comunicación que ha de tener como referente una ponencia previa. Por eso a ella vuelvo, obedeciendo a las normas de organización de este Seminario.

Creo que de la ponencia del profesor Peces-Barba se desprenden dos tesis con las que estoy muy de acuerdo: 1.<sup>a</sup> Que los derechos económicos, sociales y culturales son verdaderos derechos humanos que cuentan con todas las mejores razones a su favor, y 2.<sup>a</sup> Que la satisfacción de esos derechos, debido a la falta y escasez de recursos, ha de garantizarse efectivamente, pero no con carácter general sino selectivo.

Estas dos anteriores tesis deben enmarcarse en el contexto de una profunda crisis del Estado de bienestar social, que no es exclusivamente económica, y de un reforzamiento del papel que le corresponde jugar a la sociedad civil, pero también de la opción a favor de mantener, y ésta es otra coincidencia con el ponente, el Estado social, con todas las correcciones que sean pertinentes<sup>1</sup>. Así, el profesor Gregorio Peces-Barba señala que «la ideología que impulsa los derechos sociales los entiende en una dialéctica entre el Estado y la sociedad civil, siendo la interacción de ambas dimensiones imprescindible para su existencia. No hay derechos sociales sin intervención del Estado, y sin la participación de los ciudadanos reclamando de éste, por un procedimiento jurídico, situado en la democracia parlamentaria-representativa» (pág. 6).

---

<sup>1</sup> Me he ocupado de estos asuntos en los capítulos finales de mi libro *Filosofía política y Derecho*, Ed. Marcial Pons, Madrid, 1995, p. 101 y ss.

Como indica el ponente, los derechos económicos, sociales y culturales «tienen dificultades, tanto de identificación como de aceptación». No es su caso, ya que para él los derechos económicos, sociales y culturales sí se incluyen en la categoría genérica de los derechos fundamentales, entre otras razones por su conexión con los demás derechos, ya que, «Su objetivo era la igualdad a través de la satisfacción de necesidades básicas, sin las cuales muchas personas no podrían alcanzar los niveles de humanidad necesarios para disfrutar de sus beneficios» (pág. 10). En una argumentación muy similar, en mi libro sobre *La obediencia al Derecho* y en el contexto de una defensa del liberalismo igualitario, destacué que «Ni el desarrollo de la autonomía ni el de la libertad pueden ser reales, si no existe una suficiente igualdad de oportunidades sociales y económicas y un marco mínimamente igualitario», y que «Las mismas razones que se abogan a favor de la libertad valen para la igualdad: la dignidad humana, la autonomía moral y el derecho igual de todas las personas a ser tratados de forma semejante y con el mismo respeto»<sup>2</sup>.

En cuanto a la segunda tesis, me parece muy atinada la postura del ponente al señalar que respecto a los derechos económicos, sociales y culturales, o derechos de la tercera generación, lo esencial «es la finalidad última que se proponen, y no la forma en que se despliegan en la realidad» (pág. 15). Dado que se parte de una desigual distribución de la riqueza y de la propiedad, de que su finalidad es la igualación de oportunidades sociales, económicas y culturales y de la escasez de recursos, se impone la restricción en cuanto a la titularidad de esos derechos, pues «intentan poner en manos de los desfavorecidos instrumentos para que, de hecho, en la realidad, puedan competir y convivir como personas con las que no tienen necesidad de esas ayudas» (pág. 15). La propuesta consiste en tratar desigualmente a los desiguales, por lo que titulares de los derechos económicos, sociales y culturales sólo deben ser aquellas personas que necesitan el apoyo, y no quienes no lo necesitan». En definitiva, se ha pasado de una concepción generalizadora de los derechos económicos, sociales y culturales a una concepción restringida, donde aparecen exigiendo medidas de discriminación positiva, similares a los derechos de las minorías. Indudablemente esta solución realista para garantizar a los necesitados verdaderamente de ellos los derechos económicos, sociales y culturales, quizá, hoy por hoy, la única posible, va a precisar una nueva elaboración del concepto de derechos humanos y una nueva estructuración jurídico positiva de los derechos de prestación. No obstante, dejo para otro momento y lugar esa tarea.

---

<sup>2</sup> EUSEBIO FERNÁNDEZ, *La obediencia al Derecho*, Ed. Civitas, Madrid, 1987, pp. 236 y 240.